

**El papel de los gobiernos locales en la
planificación del desarrollo sostenible**

**The role of local governments in
sustainable development planning**

Sandra Paola Balarezo-Vélez¹
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel
Félix López
spbalarezo@espam.edu.ec

Quinche Viviana Pinargote-Álava²
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel
Félix López
qvpinargote@espam.edu.ec

doi.org/10.33386/593dp.2025.4.3463

V10-N4 (jul) 2025, pp 1141-1161 | Recibido: 31 de julio del 2025 - Aceptado: 18 de agosto del 2025 (2 ronda rev.)

1 ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0840-4098>. Docente en la Escuela Superior Politécnica de Manabí Manuel Félix López, Magister en Gestión Pública.

2 ORCID: <https://orcid.org/000-0001-5742-4072>. Docente en la Escuela Superior Politécnica de Manabí Manuel Félix López, Magister en Administración Pública.

Descargar para Mendeley y Zotero

RESUMEN

Este artículo analiza el papel de los gobiernos locales en la planificación del desarrollo sostenible en Ecuador, en el marco de la Agenda 2030. La investigación adopta un enfoque cualitativo y documental, centrado en el análisis del Examen Nacional Voluntario Ecuador 2024, así como en normativas institucionales y literatura académica relevante. Se examinan tres objetivos principales: la evaluación del marco legal e institucional que regula las competencias municipales en planificación territorial, la identificación de los desafíos operativos y técnicos que enfrentan los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), y la formulación de propuestas orientadas al fortalecimiento de su gestión para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los resultados evidencian que solo el 46,72 % de los municipios evaluados ha incorporado de manera efectiva los ODS en sus planes territoriales, con importantes disparidades regionales. Además, se identifican debilidades estructurales relacionadas con la falta de capacidades técnicas, escasa articulación intergubernamental y limitada participación ciudadana. El estudio confirma que, a pesar de contar con un marco normativo sólido, la implementación efectiva de la planificación sostenible requiere condiciones habilitantes como financiamiento adecuado, formación técnica continua y herramientas metodológicas accesibles. Finalmente, se discuten las limitaciones del estudio y se proponen futuras líneas de investigación centradas en la medición del impacto real de los planes alineados con los ODS y el fortalecimiento de la gobernanza local.

Palabras clave: planificación territorial; desarrollo sostenible; gobiernos locales; ODS; Ecuador.

ABSTRACT

This article analyzes the role of local governments in sustainable development planning in Ecuador, within the framework of the 2030 Agenda. The research adopts a qualitative and documentary approach, focusing on the analysis of the Ecuador 2024 Voluntary National Review, as well as on institutional regulations and relevant academic literature. Three main objectives are examined: the evaluation of the legal and institutional framework that regulates municipal territorial planning powers, the identification of the operational and technical challenges faced by decentralized autonomous governments (GADs), and the formulation of proposals aimed at strengthening their management to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). The results show that only 46.72% of the municipalities evaluated have effectively incorporated the SDGs into their territorial plans, with significant regional disparities. Furthermore, structural weaknesses related to a lack of technical capacity, poor intergovernmental coordination, and limited citizen participation are identified. The study confirms that, despite a solid regulatory framework, the effective implementation of sustainable planning requires enabling conditions such as adequate financing, ongoing technical training, and accessible methodological tools. Finally, the study's limitations are discussed and future lines of research are proposed, focusing on measuring the real impact of SDG-aligned plans and strengthening local governance.

Key words: territorial planning; sustainable development; local governments; SDGs; Ecuador.

Introducción

En las últimas décadas, el concepto de desarrollo ha excedido su relación única con el crecimiento económico para integrar aspectos sociales y ambientales. Este concepto de cambios ha dado espacio para el desarrollo sostenible, con el objetivo de equilibrar las necesidades del presente, sin violar las capacidades de las generaciones futuras. A diferencia de una idea abstracta, este modelo requiere una conversión estructural en la forma de planificación de la ciudad, territorio controlado y recursos distribuidos (Salustio, 2023, p.12).

La planificación sostenible del desarrollo implica actividades y sistemas coordinados entre los diferentes niveles del gobierno. Aunque las grandes soluciones a menudo dependen del nivel nacional, el diseño y la implementación de una política efectiva en el territorio requieren la participación activa de los gobiernos locales. Están más cerca de la realidad específica de la población, tienen un conocimiento profundo sobre sus necesidades y prioridades, lo que los convierte en los principales participantes en la conversión de objetivos globales en intervenciones locales efectivas (Aronés, 2023, p.63).

Sin embargo, el potencial de la transformación de los gobiernos locales no siempre corresponde a sus verdaderas capacidades de gestión. La baja distribución de recursos, las limitaciones técnicas y las debilidades institucionales a menudo no permiten que las ciudades muestren efectivamente su capacidad. Esta situación es peor en los contextos en los que la fuerza impulsora del poder, la inestabilidad política y la falta de participación de los ciudadanos limitan la autonomía y la efectividad del gobierno nacional inferior.

El desarrollo sostenible forma la Agenda de desarrollo sostenible 2023 de la ONU, en la cual los gobiernos requieren de la colaboración y coordinación de los gestores públicos, para alinearse al cumplimiento de los 17 objetivos principales de desarrollo sostenible, convirtiéndose en un reto mundial (ONU, 2015).

Esto requiere principalmente una participación integral y una planificación a largo plazo. Las autoridades locales desempeñan un papel básico en el desarrollo de planes de desarrollo y territorios, las herramientas deben ser la base para administrar el uso razonable de la tierra, proteger los recursos naturales y proporcionar servicios públicos. Sin embargo, en muchos casos, estos planes se preparan con muy pocas técnicas pesadas o se convierten en documentos oficiales sin un uso efectivo.

Del mismo modo, el plan de desarrollo sostenible requiere datos precisos, actualizaciones de diagnóstico y herramientas tecnológicas que contribuyan a la toma de decisiones. Muchas autoridades locales no tienen la capacidad, lo que lleva a actos improvisados o basados en la conciencia subjetiva. La falta de información con información sistemática también evita el monitoreo y la evaluación de los políticos implementados, lo que complica la mejora de los procesos de gestión territorial.

La Agenda de 2030 ha mejorado la necesidad de atraer a las autoridades locales en el proceso de desarrollo. De hecho, algunos objetivos de desarrollo sostenible (ODS) están directamente relacionados con competencias municipales, como la gestión del agua (ODS 6), las ciudades sostenibles (ODS 11), la acción por el clima (ODS 13) o la gobernanza eficaz (ODS 16). Esto aumenta la urgencia de fortalecer las oportunidades locales de acuerdo con estas obligaciones (Mattioli, 2021, p.53).

En el caso de América Latina, muchas ciudades tienen una doble carga en el campo de la pobreza y la vulnerabilidad al medio ambiente, el papel del gobierno local en el plan sostenible es aún más importante. Esta área necesita una política más integrada, estable y adaptable de cada territorio (Angileli et al., 2022, p.45). En este sentido, mejorar las instituciones, la capacitación técnica y la creación de marcos legales apropiados presentados como condiciones necesarias para avanzar.

Por otro lado, las innovaciones tecnológicas proporcionan valiosas capacidades

de plan sostenible. El uso de sistemas de información geográfica, plataformas digitales de participación o herramientas de monitoreo ambiental puede mejorar la calidad de la gestión local. Pero para que estas tecnologías sean efectivas, es necesario invertir en infraestructura digital y en la formación del personal técnico.

De acuerdo a Morales *et al* (2023) “el desarrollo sostenible también plantea un desafío cultural. Implica transformar mentalidades, patrones de consumo y prioridades institucionales” (p.28). Los gobiernos locales pueden desempeñar un papel educativo, promoviendo campañas, programas y proyectos que sensibilicen a la población sobre la importancia de adoptar prácticas más sostenibles. Esta dimensión cultural, aunque menos visible, es crucial para consolidar cambios duraderos.

En este artículo se parte de la premisa de que los gobiernos locales son agentes clave para lograr el desarrollo sostenible, pero que necesitan un entorno habilitante para desplegar todo su potencial. Se propone analizar críticamente su papel, sus competencias actuales, las limitaciones que enfrentan y las estrategias que podrían contribuir a fortalecer su accionar.

La problemática que se busca abordar es la limitada capacidad de los gobiernos locales para liderar procesos de planificación territorial con enfoque de sostenibilidad, en gran medida debido a debilidades estructurales, técnicas y políticas que obstaculizan su desempeño. Esta situación se traduce en una planificación fragmentada, con escasa incidencia en la transformación real del territorio. Desde esta problemática, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el papel de los gobiernos locales en la planificación del desarrollo sostenible y cuáles son los factores que condicionan su capacidad para ejercerlo de manera efectiva? Esta pregunta permite orientar el análisis hacia los elementos internos y externos que inciden en la gestión local.

Como objetivo general, se plantea analizar el papel de los gobiernos locales en la planificación del desarrollo sostenible, con énfasis en sus capacidades, obstáculos

y oportunidades de fortalecimiento. Entre los objetivos específicos se proponen: (1) examinar el marco legal e institucional que define las competencias municipales en materia de planificación territorial; (2) identificar los principales desafíos operativos y técnicos que enfrentan los gobiernos locales; y (3) formular propuestas que permitan mejorar su desempeño y su incidencia en la sostenibilidad del territorio.

Con este enfoque, se espera aportar a la construcción de una visión más integral, contextualizada y propositiva sobre el rol de los gobiernos locales en el desarrollo sostenible. Se parte de la convicción de que solo con gobiernos locales fortalecidos, democráticos y con visión de futuro será posible avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y en armonía con el entorno.

Fundamentación Teórica

En esta sección se presentan los conceptos y antecedentes que sustentan el estudio, abordando el papel de los gobiernos locales en el desarrollo sostenible, la planificación local sostenible, la capacidad institucional y los principales desafíos para su implementación. Además, se incluyen referencias comparativas de Ecuador y países vecinos para contextualizar los hallazgos.

Papel de los gobiernos locales en el desarrollo sostenible

La planificación local sostenible implica que los gobiernos municipales no solo ejecuten políticas, sino que integren distintos sectores como educación, salud, urbanismo, medio ambiente y desarrollo económico. Esta integración permite generar estrategias intersectoriales que respondan a necesidades reales de la comunidad, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Santos, 2023, p.83). Además, al fomentar la cooperación entre departamentos locales, se mejora la eficiencia en la implementación de proyectos y se fortalece la gobernanza territorial, asegurando que las decisiones tomen en cuenta

impactos sociales, ambientales y económicos simultáneamente.

La capacidad técnica y administrativa de los gobiernos locales es fundamental para implementar políticas públicas de manera efectiva. Contar con personal capacitado, información actualizada y herramientas tecnológicas permite diseñar planes estratégicos que aborden problemas locales complejos. Asimismo, fortalece la resiliencia territorial frente a riesgos sociales y ambientales. La inversión en formación, investigación y acceso a bases de datos consolida la habilidad de los municipios para responder a desafíos de desarrollo sostenible y tomar decisiones basadas en evidencia, lo que aumenta la legitimidad y eficacia de sus acciones (Hernández, 2025, p.4).

De acuerdo a Genta et al., (2022) “en América Latina, incluyendo Ecuador, se observan marcadas desigualdades entre municipios grandes y pequeños” (p.38). Mientras los primeros pueden generar ingresos propios y contar con equipos especializados, los segundos dependen en gran medida de transferencias del gobierno central. Esta desigualdad limita la autonomía local y dificulta la planificación de proyectos sostenibles a largo plazo. Por ello, es crucial promover mecanismos de financiamiento equitativos, fortalecer capacidades locales y facilitar el acceso a recursos técnicos para garantizar que todos los territorios puedan implementar políticas efectivas y sostenibles.

La participación ciudadana constituye un elemento clave en la gobernanza local. Cuando los habitantes son incluidos en el diseño de políticas, sus necesidades y expectativas se reflejan en los planes de desarrollo, aumentando la legitimidad de las decisiones. Además, la participación fomenta la corresponsabilidad, pues los ciudadanos se comprometen con la ejecución de proyectos y el seguimiento de resultados (Cevallos & Zambrano, 2023, p.8). Herramientas como consultas públicas, audiencias y plataformas digitales de interacción permiten que la comunidad se convierta en un actor activo en la planificación local sostenible,

fortaleciendo la transparencia y confianza en la gestión pública.

La innovación tecnológica es un recurso clave para fortalecer la gestión local. La implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), plataformas digitales de participación ciudadana y sistemas de monitoreo ambiental permite mejorar la eficiencia en la toma de decisiones (Sarango, 2024, p.4). Sin embargo, la tecnología por sí sola no garantiza resultados; es necesario que el personal municipal esté capacitado y que las herramientas se mantengan y actualicen continuamente. De esta manera, los municipios pueden gestionar recursos, planificar proyectos y evaluar resultados de manera más precisa y efectiva.

La coordinación entre distintos niveles de gobierno es esencial para la planificación sostenible. La alineación de políticas locales con programas provinciales y nacionales asegura coherencia en la gestión pública, evita duplicidad de esfuerzos y optimiza los recursos disponibles (Valdiviezo & Martínez, p.63). Además, la coordinación facilita la implementación de proyectos integrales que involucren infraestructura, servicios sociales y protección ambiental. Esta interacción intergubernamental fortalece la capacidad de los municipios para enfrentar desafíos complejos y contribuye al cumplimiento de compromisos internacionales como la Agenda 2030.

Los gobiernos locales cumplen un rol educativo y cultural importante. Promover campañas de sensibilización sobre sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de la huella ambiental permite formar ciudadanos conscientes y responsables. Estas acciones fomentan cambios en hábitos y actitudes, fortaleciendo la resiliencia comunitaria y la participación activa en políticas de desarrollo (Callejón, 2021, p.19). Además, al incentivar la educación ambiental en escuelas y comunidades, los municipios contribuyen a consolidar una cultura de sostenibilidad que puede sostenerse en el tiempo y replicarse en diferentes territorios.

La evaluación y monitoreo de políticas locales es fundamental para garantizar resultados sostenibles. Establecer indicadores claros y mecanismos de rendición de cuentas permite identificar avances, corregir desviaciones y replicar buenas prácticas. Los gobiernos locales pueden utilizar herramientas de gestión y auditorías periódicas para evaluar la efectividad de los programas implementados (Gutiérrez, et al., 2025, p.43). De esta manera, se asegura que los proyectos no solo cumplan objetivos inmediatos, sino que generen impactos positivos a largo plazo, fomentando la transparencia y confianza de la ciudadanía en la gestión pública.

La cooperación entre municipios de diferentes regiones fortalece la innovación y transferencia de conocimientos. Experiencias exitosas en gestión ambiental, planificación urbana o participación ciudadana pueden adaptarse a contextos similares, contribuyendo al desarrollo sostenible regional. Estas alianzas permiten compartir recursos, buenas prácticas y soluciones a problemas comunes, optimizando resultados y evitando errores replicados. Además, la cooperación regional potencia la visibilidad de los municipios en escenarios nacionales e internacionales, facilitando acceso a financiamiento y asistencia técnica.

Es importante mencionar que, fortalecer a los gobiernos locales como agentes de desarrollo sostenible requiere un marco normativo sólido, financiamiento adecuado y programas continuos de formación técnica. Estas condiciones permiten que los municipios transformen los compromisos de la Agenda 2030 en resultados tangibles y equitativos para sus comunidades. Sin estas habilitantes, incluso los planes mejor diseñados pueden fracasar. Por lo tanto, es fundamental garantizar la capacidad institucional, la autonomía financiera y el respaldo normativo para que cada municipio pueda cumplir su papel como motor del desarrollo local sostenible.

La planificación local sostenible y su vinculación con los ODS

La organización del desarrollo sostenible a nivel local ha llegado a ser un componente clave para crear comunidades resilientes, inclusivas y que utilicen sus recursos de manera eficiente. Este tipo de planificación abarca más que solo la asignación de responsabilidades o la creación de objetivos teóricos; conlleva la efectiva combinación de metas ambientales, sociales y económicas en un rumbo que dirija las decisiones públicas a mediano y largo plazo. En este marco, Sánchez (2024) define que “las administraciones locales, como responsables del territorio y principales brindadores de servicios esenciales, deben formular políticas que fomenten el bienestar común sin afectar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades” (p.34)-

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, establece un esquema global que abarca 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas específicas que deben aplicarse en todos los niveles gubernamentales. Aunque se trata de un pacto internacional, su efectividad depende en gran medida de las iniciativas tomadas a nivel local. La “localización de los ODS” es un proceso que adapta las metas globales a las características específicas de cada territorio, considerando sus elementos culturales, sociales, económicos y ambientales (Arredondo, 2021, p.56). Por lo tanto, las municipalidades deben ajustar sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) para que correspondan con estos objetivos, garantizando así una planificación alineada con los compromisos globales.

Uno de los retos más significativos de este proceso es evitar que los planes de desarrollo se conviertan en simples documentos formales o en ejercicios de cumplimiento regulatorio. Muchas veces, los PDOT se crean sin diagnósticos profundos, con escasa participación de la ciudadanía o con limitada capacidad técnica, lo que dificulta su aplicación efectiva. Esto genera una desconexión entre la planificación escrita

y la acción pública real, lo que pone en duda la confianza en las instituciones locales. Tal como lo menciona García (2022) “para que los gobiernos locales se transformen en verdaderos impulsores del desarrollo sostenible, es fundamental que sus planes estén fundamentados en datos actualizados, que incluyan indicadores de seguimiento, objetivos cuantificables y mecanismos de rendición de cuentas bien definidos” (p.50).

Además, es crucial señalar que la planificación sostenible abarca más que solo cuestiones ambientales. Aunque estos aspectos son esenciales, el desarrollo territorial debe incluir la integración social, la igualdad de género, la eliminación de la pobreza, la salud pública y el acceso a la educación, todos temas presentes en los diversos ODS (Zelada et al, 2025, p.19). Por ejemplo, el ODS 11 fomenta la creación de ciudades que sean inclusivas, seguras y resilientes, mientras que el ODS 10 trabaja en la disminución de las desigualdades tanto dentro como entre naciones. Incorporar estos conceptos en la planificación a nivel local implica crear políticas intersectoriales y con una visión holística, que conecten acciones procedentes de las áreas urbana y rural, prestando atención a los grupos más desprotegidos.

Asimismo, la planificación sostenible debe contar con apoyo político e institucional para llevarse a cabo de manera efectiva. No es suficiente con establecer líneas estratégicas si no se garantizan los recursos, el personal especializado y la dedicación de las autoridades para llevarlas a cabo. La sostenibilidad necesita ser un principio que cruce todas las áreas de gestión local: desde la construcción pública hasta el manejo de residuos, desde el urbanismo hasta la educación ambiental. Esta integración exige coordinación entre las diferentes oficinas municipales, colaboración con actores del sector privado y de la sociedad civil, además de estar alineada con los niveles provinciales y nacionales de gobierno.

Cabe mencionar que, los gobiernos locales tienen una función estratégica en la implementación de los ODS a través de procesos

de planificación territorial que integren las dimensiones del desarrollo sostenible. Para lograrlo, deben concebir la planificación no como una obligación formal, sino como una oportunidad para construir comunidades más justas, sostenibles y resilientes. Solo así podrán traducirse los compromisos globales de la Agenda 2030 en transformaciones concretas en la vida cotidiana de las personas. Esta visión requiere liderazgo, conocimiento técnico, participación ciudadana y, sobre todo, una firme convicción de que el cambio comienza desde lo local.

Capacidad institucional local y desafíos para implementar los ODS

La competencia institucional es un factor crucial que permite a los gobiernos locales desempeñar sus funciones de manera efectiva, sobre todo en lo que respecta a la planificación del desarrollo sostenible. Este aspecto no solo abarca el tamaño de las instituciones, sino también su organización, calidad técnica, normativas vigentes, recursos disponibles y cultura de gestión (Pérez & Caballer, 2022, p.73). Cuando las municipalidades carecen de personal competente, tecnología adecuada o procesos internos eficaces, la implementación de políticas que incorporen los principios de sostenibilidad se vuelve complicada. En este escenario, los ODS se transforman en metas inalcanzables, no por falta de intención, sino por la falta de instrumentos.

La Agenda 2030 reconoce que las realidades locales presentan retos variados en lo que concierne a la estructura institucional. En muchas naciones, particularmente en América Latina, los gobiernos locales enfrentan restricciones por presupuestos limitados, rotación elevada de personal y baja profesionalización en sus equipos técnicos. Esto impacta directamente en su habilidad para generar datos, llevar a cabo diagnósticos participativos, desarrollar planes estratégicos y ejecutar políticas enfocadas en resultados (Neto, 2021, p.47). Además, cuando los gobiernos locales carecen de autonomía económica o dependen en gran medida de transferencias del gobierno central, su capacidad

para innovar y planificar a largo plazo se ve notablemente restringida.

De acuerdo a Vegas (2021) “otro elemento que restringe la capacidad institucional es la fragmentación interna en las entidades locales. Es común que las áreas responsables de medio ambiente, desarrollo social, obras públicas y planificación territorial operen de manera aislada, sin coherencia o coordinación en sus objetivos” (p.32). Para abordar esta debilidad, se necesita una administración pública que funcione bajo principios de coordinación interdepartamental, planificación holística y colaboración en equipo. Asimismo, la existencia de marcos normativos claros y actualizados resulta clave para que los gobiernos locales cumplan con sus funciones sin interferencias arbitrarias de instancias superiores.

La gestión ambiental es uno de los principales desafíos para los gobiernos locales. La planificación urbana, manejo de residuos, conservación de áreas verdes, protección del agua y mitigación de riesgos climáticos están directamente vinculados con los ODS (Ríos & González, 2021, p.38). Integrar estas acciones en planes estratégicos permite que la sostenibilidad no sea un componente aislado, sino una línea transversal en todas las políticas municipales. Además, estas medidas contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y a promover un desarrollo territorial más equilibrado y resiliente frente a cambios ambientales y climáticos.

La coordinación con otros niveles de gobierno representa otro desafío importante para la implementación de los ODS a nivel local. La alineación de políticas nacionales, regionales y municipales requiere mecanismos claros de comunicación y cooperación que permitan la integración de estrategias de desarrollo sostenible (Pérez & Caballer, 2022, p.5). Sin estas sinergias, los esfuerzos locales pueden verse duplicados o incluso contradichos por decisiones superiores, limitando su efectividad. Por ello, establecer redes de colaboración interinstitucional y convenios de cooperación técnica es fundamental para que los gobiernos locales fortalezcan su capacidad de planificación y ejecución de políticas públicas sostenibles.

Asimismo, la disponibilidad de recursos financieros adecuados constituye un pilar esencial para la capacidad institucional. La implementación de los ODS demanda inversiones en infraestructura, programas sociales, tecnologías verdes y formación de personal especializado. En contextos donde los presupuestos locales son insuficientes, los gobiernos dependen de transferencias externas o cooperación internacional, lo que puede condicionar la agenda local y limitar la autonomía de decisión (López & Ons, 2023, p.10-12). Por tanto, desarrollar estrategias de financiamiento sostenibles y diversificadas se vuelve una necesidad para garantizar la continuidad de los proyectos y alcanzar metas de desarrollo a largo plazo.

Por otro lado, de acuerdo a Carreras (2025) “la formación y capacitación del capital humano en los gobiernos locales es determinante para superar las barreras institucionales” (p.38). La actualización constante de conocimientos técnicos, normativos y de gestión permite que los equipos municipales respondan de manera eficiente a los desafíos complejos que implica la Agenda 2030. Programas de entrenamiento, intercambio de experiencias y mentorías contribuyen a profesionalizar a los funcionarios, generar cultura de innovación y promover la toma de decisiones basadas en evidencia. De esta manera, los municipios fortalecen su capacidad institucional y se posicionan como actores clave en la implementación efectiva de los ODS.

Participación ciudadana como impulsor de sostenibilidad local

Un aspecto esencial para alcanzar el desarrollo sostenible es la implicación activa y relevante de la ciudadanía en los procesos de planificación y gestión pública a nivel local. Esta implicación debe ser vista no como una formalidad o un requisito burocrático, sino como un derecho y una obligación que refuerza la democracia, la transparencia y la inclusión social (Torres, et al 2023, p.51). La Agenda 2030 destaca explícitamente la relevancia de involucrar a las comunidades, grupos vulnerables y organizaciones sociales en la toma de decisiones

que impactan en su entorno, de manera que las políticas públicas atiendan a las necesidades reales y fomenten la corresponsabilidad.

Conforme lo exponen Quecaño & Dominguez (2025) “la implicación ciudadana en la planificación del desarrollo local puede llevarse a cabo a través de varios mecanismos, como reuniones públicas, presupuestos participativos, comités consultivos y plataformas digitales de consulta” (p.39). Por otro lado, como lo mencionan Martínez et al (2024) “estas instancias deben ser creadas para ser inclusivas, accesibles y deliberativas, permitiendo que la diversidad social exprese sus puntos de vista y propuestas” (p.19). Sin embargo, en numerosos municipios, la participación tiende a ser restringida o simplemente simbólica, limitada a eventos aislados que no impactan verdaderamente las decisiones políticas. Esta situación causa desconfianza, desinterés y desconexión con la gestión pública.

Cabe mencionar que, la participación es crucial para detectar grupos que históricamente han sido excluidos o considerados vulnerables, como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y minorías étnicas, garantizando que sus derechos y necesidades queden integrados en los planes de desarrollo.

Enfoque Comparativo y Regional en la Planificación Estratégica para el Desarrollo Sostenible

La formulación de estrategias orientadas hacia un desarrollo sostenible ha incrementado su importancia en América Latina, favorecida por compromisos globales como la Agenda 2030 de la ONU y la necesidad de abordar desafíos socioeconómicos y medioambientales específicos de cada región. En naciones andinas tales como Colombia, Perú y Bolivia, la experiencia de las administraciones locales revela progresos y obstáculos que permiten hacer comparaciones con la situación en Ecuador.

En Colombia, la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal, que están interconectados con los Planes de Ordenamiento Territorial, ha

perseguido la integración de la gestión ambiental, la inclusión social y el desarrollo económico a nivel local. Sin embargo, investigaciones recientes señalan que la desigualdad regional y las limitaciones en las capacidades técnicas de los municipios aún restringen la efectividad de estos planes (CEPAL, 2022).

Por otro lado, en Perú, los Planes de Desarrollo Concertado han funcionado como herramientas para fomentar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. A pesar de esto, la falta de continuidad en las políticas y la elevada rotación de autoridades han dificultado la implementación sostenida de planes a largo plazo (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 2022). Así mismo, en Bolivia, la planificación a nivel local ha estado caracterizada por un notable énfasis en la descentralización y la autonomía de los municipios. Aunque esto ha potenciado la capacidad de respuesta ante diversas realidades territoriales, también ha puesto de manifiesto desigualdades en el acceso a recursos y en la calidad de los procesos de diseño de políticas (Estado Plurinacional de Bolivia, 2021).

En Ecuador, la planificación estratégica local varía considerablemente entre regiones. En la Costa, los gobiernos municipales generalmente dan prioridad a proyectos de infraestructura y gestión de riesgos relacionados con fenómenos climáticos como inundaciones y erosión en las costas. Por otro lado, en la Sierra, las políticas suelen centrarse en el fortalecimiento del sector agrícola, la protección del patrimonio cultural y el manejo de las cuencas hidrográficas. En la Amazonía, la planificación enfrenta el desafío de equilibrar la explotación de recursos naturales con la conservación de ecosistemas diversos y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y nacionalidades. Finalmente, en Galápagos, el enfoque de planificación se dirige a regular el turismo, controlar especies invasoras y asegurar la protección del delicado ecosistema insular (Gobierno de la República del Ecuador, 2020).

La variabilidad regional en Ecuador demuestra que, si bien hay un conjunto normativo compartido, principalmente establecido

por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo, la aplicación efectiva de la planificación estratégica depende en gran medida de las particularidades geográficas, económicas, sociales y culturales de cada área. Al llevar a cabo un análisis comparativo con las experiencias de naciones vecinas y una caracterización interna regional, se pueden reconocer prácticas ejemplares y enseñanzas adquiridas que podrían mejorar la capacidad de los gobiernos locales para promover un desarrollo sostenible más justo e inclusivo.

Método

Esta investigación se sitúa dentro de un enfoque metodológico cualitativo, dado que su objetivo no es cuantificar variables numéricas, sino interpretar y analizar en profundidad el papel de los gobiernos locales en la planificación del desarrollo sostenible. El estudio busca comprender los procesos, las prácticas institucionales y las dinámicas territoriales que afectan la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considerando el contexto ecuatoriano y la flexibilidad propia de un enfoque interpretativo.

El diseño adoptado es descriptivo y documental. Es descriptivo porque se pretende detallar y caracterizar cómo los gobiernos locales planifican, gestionan y ejecutan acciones vinculadas al desarrollo sostenible. Es documental porque el análisis se basa en la sistematización de fuentes secundarias, incluyendo planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT), informes técnicos, normativas nacionales y los informes del Examen Nacional Voluntario (VNR) de Ecuador, con especial énfasis en la localización de los ODS y el papel de los gobiernos locales.

Los instrumentos principales consistieron en documentos oficiales, seleccionados por su relevancia institucional, normativa y teórica:

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales y

municipales de Ecuador, emitidos entre 2018 y 2024. Se revisaron 10 planes, los cuales aportan información sobre estrategias de desarrollo, recursos disponibles y políticas locales relacionadas con los ODS.

Normativas y leyes nacionales relacionadas con desarrollo sostenible y planificación territorial, emitidas entre 2015 y 2024, para comprender el marco legal que regula la acción de los gobiernos locales.

Informes del Examen Nacional Voluntario (VNR) de Ecuador 2020 y 2024, que permiten evaluar los avances y brechas locales respecto a la Agenda 2030.

Criterios de inclusión y exclusión

Inclusión: documentos emitidos por gobiernos locales ecuatorianos; informes oficiales sobre ODS; normativas nacionales vigentes; documentos emitidos entre 2018 y 2024; textos directamente relacionados con planificación sostenible y gobernanza local.

Exclusión: documentos sin fecha o vigencia, textos de opinión no sustentados en evidencia, información irrelevante para los ODS o para la gestión local, y documentos centrados exclusivamente en ámbitos nacionales sin aplicación local.

Se aplicó análisis de contenido, codificando los documentos por categorías temáticas previamente definidas: planificación sostenible, capacidad institucional, participación ciudadana y mecanismos de gobernanza local. Este procedimiento permitió organizar y sistematizar la información para interpretar de manera crítica los retos y oportunidades que enfrentan los gobiernos locales en Ecuador, comparando la teoría con la práctica reflejada en los informes VNR y los PDOT.

El estudio se centra en la experiencia de los gobiernos locales ecuatorianos, sin pretender realizar generalizaciones estadísticas. Su objetivo es generar una comprensión profunda y contextualizada de los procesos de implementación de los ODS, proporcionando

una base para investigaciones futuras y recomendaciones útiles para la gestión pública local. Asimismo, permite identificar fortalezas y limitaciones en la planificación local, contribuyendo a la mejora de la sostenibilidad territorial y social.

Resultados

Los resultados de este estudio muestran varias tensiones entre lo que se espera y lo que se realiza en las administraciones locales de Ecuador respecto a la organización del desarrollo sostenible. A pesar de los progresos en leyes y directrices a nivel internacional, siguen existiendo deficiencias técnicas, institucionales y sociales que impiden una aplicación adecuada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las comunidades, lo que representa un reto para las administraciones locales dentro del contexto de la Agenda 2030.

El sistema jurídico de Ecuador reconoce claramente la independencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para organizar su desarrollo en el territorio. Documentos como la Constitución de 2008 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) facultan a las municipalidades para crear e implementar sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). En teoría, esta legislación representa un avance notable hacia la descentralización operativa del Estado y el fomento del desarrollo local.

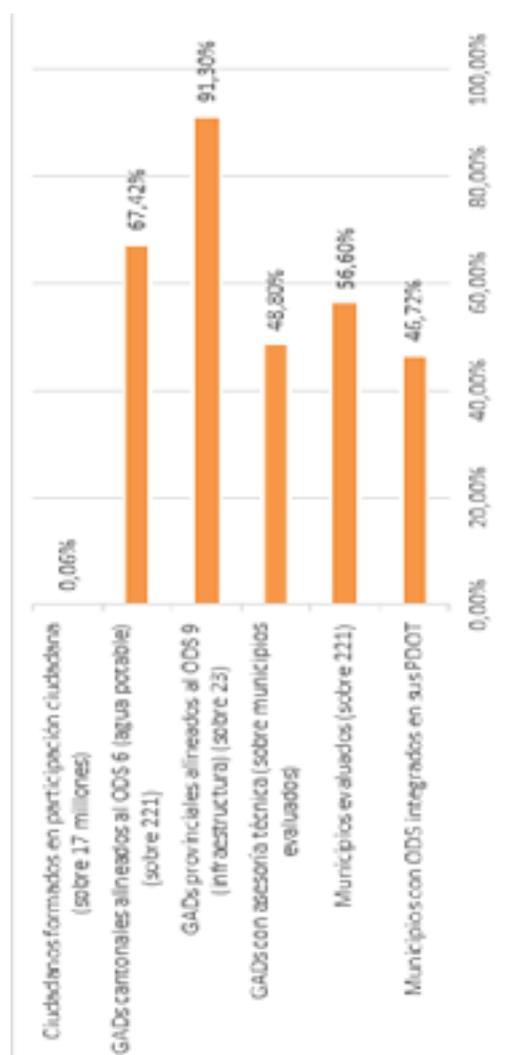
No obstante, en la práctica, llevar a cabo estos marcos legales presenta numerosos impedimentos. La autonomía teórica no siempre se convierte en independencia efectiva. Muchos GAD no disponen de los recursos técnicos y financieros necesarios para ejercer completamente sus responsabilidades. Asimismo, existe una continua dependencia de las transferencias del gobierno central y una escasa colaboración intergubernamental (Ramos, 2022, p.38). Esta realidad crea una discrepancia entre lo que estipula la ley y lo que realmente se puede realizar. Por lo tanto, aunque el marco institucional es sólido, su implementación es

desigual y frecuentemente simbólica, lo que limita la eficacia de la planificación local enfocada en la sostenibilidad.

Un hallazgo clave del Examen Nacional Voluntario Ecuador 2024 indica que solo el 46,72 % de los PDOT evaluados incluyen metas o acciones que se alinean con los ODS (ilustración 1). Este dato pone de manifiesto un problema estructural significativo: la planificación territorial no ha conseguido integrar de manera generalizada los principios de la Agenda 2030. Esto no necesariamente responde a la falta de voluntad política, sino a obstáculos técnicos y operativos fundamentales.

Figura 1

Indicadores sobre la integración de los ODS en la planificación local en Ecuador.



Nota. Elaborado por autoras basada en el Examen Nacional Voluntario Ecuador 2024

De acuerdo a la ilustración 1, se puede evidenciar que, la integración de los ODS en los PDOT alcanza apenas el 46,72 % de los municipios evaluados, y estos representan poco más de la mitad del total nacional. Esto significa que menos del 25 % del total de municipios del país tiene evidencia clara de planificación con enfoque ODS, lo cual debilita el alcance real de la Agenda 2030 desde lo local. Además, apenas el 48,80 % de los municipios ha recibido algún tipo de asesoría técnica, lo que muestra que el apoyo estatal no llega de manera equitativa a todos los territorios y reproduce desigualdades institucionales. La alta alineación de los GAD provinciales con el ODS 9 (91,30 %) y de los cantonales con el ODS 6 (67,42 %) evidencia que existen prioridades sectoriales visibles, pero otros ODS, como igualdad, cambio climático o educación, reciben menor atención. El indicador más preocupante es el de formación ciudadana, donde solo el 0,06 % de la población ha sido capacitada formalmente en temas de participación o planificación, dejando a la ciudadanía como un actor periférico en los procesos de desarrollo sostenible.

Así mismo, la alta alineación de los GAD provinciales con el ODS 9 (91,30 %) y de los cantonales con el ODS 6 (67,42 %) demuestra que existen temas prioritarios concretos que logran mayor atención, posiblemente por su visibilidad pública, financiamiento disponible o presión social. Sin embargo, esto también podría indicar un enfoque sectorial limitado, dejando de lado otros ODS como igualdad, cambio climático o educación. El indicador más preocupante es el de formación ciudadana: apenas el 0,06 % de la población ha sido capacitada formalmente en temas de participación o planificación. Esto significa que, en la práctica, la ciudadanía sigue siendo un actor periférico en los procesos de desarrollo sostenible local, lo cual debilita la legitimidad, la transparencia y la corresponsabilidad institucional.

En Ecuador, la implementación de los ODS a nivel local enfrenta desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la equidad de género y la conectividad digital. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

(INEC), en junio de 2024, la tasa de empleo adecuado fue del 35,4% a nivel nacional, con una notable disparidad entre géneros: el 40,7% de los hombres y solo el 28,1% de las mujeres accedieron a empleos formales y bien remunerados. Además, las mujeres representan el 57% de las personas desempleadas, lo que refleja barreras estructurales persistentes en el mercado laboral (Ministerio de producción, 2024). Esta desigualdad se ve reflejada en la participación de las mujeres en sectores con menor nivel de tecnificación. Según el Ministerio de Trabajo, el 79% de las mujeres con empleo se concentran en actividades con bajo nivel de tecnificación, lo que limita su acceso a oportunidades en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible.

Por otro lado, la brecha digital en Ecuador también representa un obstáculo para la implementación efectiva de los ODS. Aunque el acceso a Internet ha mejorado, persisten disparidades significativas entre zonas urbanas y rurales. En 2024, el 66% de los hogares urbanos tenían acceso a Internet, frente al 32,8% en zonas rurales. Esta desigualdad en el acceso a la tecnología limita la participación de las comunidades rurales en procesos de planificación y monitoreo de los ODS (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2024).

Comparando con otros países de la región, se observa que esta situación no es exclusiva de Ecuador. En Perú, los gobiernos locales muestran avances en la generación de información y coordinación intergubernamental para implementar los ODS; no obstante, los municipios rurales y aquellos con menor capacidad técnica presentan dificultades similares a las ecuatorianas, especialmente en cuanto a participación ciudadana y descentralización efectiva. Según CEPLAN (2023), el avance promedio en la implementación de los ODS en Perú alcanza un 65,5 %, con brechas significativas entre regiones urbanas y rurales, lo que evidencia que la capacidad institucional local sigue siendo un factor limitante para una implementación equitativa.

En Colombia, aunque la legislación permite cierta autonomía de los municipios,

muchos enfrentan restricciones por centralismo fiscal, debilidad institucional y limitada gobernanza local. Los municipios de menor categoría presentan dificultades muy similares a las observadas en Ecuador, reflejando un patrón regional de desigualdad en la capacidad institucional (Hernández, 2025, p.83) El Departamento Nacional de Planeación de Colombia indica que el 61 % de los encuestados considera que los trámites requeridos por el gobierno nacional no son simples, afectando la efectividad de las políticas locales relacionadas con los ODS y limitando la participación de la ciudadanía en la planificación y ejecución de proyectos sostenibles.

Bolivia, por su parte, ha priorizado la cooperación intermunicipal y la participación comunitaria, especialmente con pueblos indígenas, para integrar los ODS. A pesar de ello, persisten limitaciones en infraestructura, escasez de personal técnico y fragmentación territorial que dificultan la implementación efectiva, mostrando que el fortalecimiento institucional continúa siendo un factor crítico para la sostenibilidad (Estado Plurinacional de Bolivia, 2021). El Atlas Municipal de los ODS en Bolivia reporta que la cobertura de indicadores clave varía significativamente entre municipios, destacando que solo un 58,7 % de los municipios ha alcanzado avances sustanciales en la alineación de sus planes locales con los ODS. Esta situación evidencia la necesidad de reforzar la capacitación técnica y la cooperación intermunicipal para lograr un desarrollo sostenible integral y equitativo.

Estas comparaciones muestran que, aunque los contextos y políticas varían, los países de la región enfrentan retos comunes: insuficiencia de recursos financieros, limitada capacitación técnica de los funcionarios locales y escasa participación ciudadana en la planificación y seguimiento de políticas sostenibles. La evidencia regional permite concluir que la mejora de la capacidad institucional local, junto con políticas inclusivas de gobernanza y herramientas de monitoreo efectivas, son fundamentales para reducir las brechas y garantizar un desarrollo

sostenible que responda a las necesidades reales de la población.

En el caso ecuatoriano, estas limitaciones se reflejan en la concentración de recursos técnicos en unos pocos municipios y en la falta de continuidad en los procesos estratégicos debido a la alta rotación de funcionarios y la carencia de herramientas metodológicas actualizadas. No obstante, el desarrollo de iniciativas como la creación de una aplicación digital nacional para supervisar la concordancia de los PDOT con los ODS proyectada para 2024 representa una oportunidad significativa para fortalecer la planificación local, detectar deficiencias y establecer rutas de mejora concretas. La implementación de estas soluciones tecnológicas debe acompañarse de un acompañamiento constante, capacitación y políticas de financiamiento más justas para que los GAD actúen como verdaderos motores del desarrollo sostenible.

En síntesis, los resultados reflejan que Ecuador, al igual que sus países vecinos, enfrenta desafíos estructurales en la implementación de los ODS a nivel local, donde la brecha entre la normativa y la práctica, la limitada participación ciudadana y la insuficiente capacidad técnica constituyen los principales obstáculos. Solo mediante la articulación de recursos, fortalecimiento institucional y gobernanza inclusiva se podrá avanzar hacia un desarrollo sostenible efectivo y equitativo, alineado con los principios de la Agenda 2030 y las realidades territoriales de cada municipio.

Cabe mencionar que, muchos GAD padecen de escasez crónica de personal técnico capacitado, lo que dificulta el desarrollo de planes con una visión de sostenibilidad integral. En segundo lugar, la alta rotación de funcionarios y técnicos, característica de los ciclos electorales, obstaculiza la continuidad de procesos estratégicos. En tercer lugar, la carencia de herramientas metodológicas y de datos recientes limita la capacidad de seguimiento y evaluación, que son esenciales para un enfoque basado en resultados. Finalmente, aunque 61 GAD recibieron apoyo técnico, esta cifra sigue

siendo escasa en comparación con los 221 municipios del país.

Por otro lado, a pesar de las dificultades, el documento muestra varias oportunidades importantes para mejorar la capacidad de las GAD en la planificación sostenible. Una opción es la creación de una aplicación digital nacional destinada a supervisar la concordancia de los PDOT con los ODS, cuyo lanzamiento está programado para el 2024. Esta herramienta permitirá a los gobiernos locales medir su nivel de cumplimiento, detectando deficiencias y estableciendo caminos de mejora.

No obstante, estas iniciativas todavía presentan fragmentación y dependen en gran medida del apoyo político y de la disponibilidad de asistencia técnica. Para que las GAD actúen realmente como motores del desarrollo sostenible, es fundamental avanzar hacia políticas públicas integrales que fortalezcan las instituciones, ofrezcan apoyo técnico constante y establezcan sistemas de financiamiento más justos. Solo así se podrá reducir la brecha entre la planificación y la sostenibilidad efectiva en el territorio.

Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo analizar el papel de los gobiernos locales en la planificación del desarrollo sostenible en Ecuador, tomando como base el Examen Nacional Voluntario Ecuador 2024 y diversos documentos técnicos e institucionales. Los resultados obtenidos revelan avances parciales en la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel local, al tiempo que ponen en evidencia limitaciones estructurales que dificultan una implementación efectiva y equitativa en el territorio nacional. La discusión que se presenta a continuación permite comprender más profundamente el significado de estos hallazgos, sus implicaciones y los caminos a seguir. Los resultados no solo muestran cifras aisladas, sino que reflejan la capacidad institucional y la cultura de planificación de los gobiernos locales, aspectos clave para la efectividad de la Agenda 2030.

En primer lugar, el hecho de que solo el 46,72 % de los municipios evaluados haya incorporado los ODS en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) refleja una situación de parcial avance en la territorialización de la Agenda 2030. Este dato resulta preocupante si se considera que los PDOT constituyen el principal instrumento de planificación en el nivel local y que su alineación con los ODS es esencial para garantizar coherencia entre las acciones municipales y los compromisos internacionales asumidos por el país. Este resultado, lejos de ser un simple dato cuantitativo, pone en evidencia un problema estructural: la planificación local aún no ha internalizado de forma integral los principios de sostenibilidad, equidad y participación que plantea la Agenda 2030. Este resultado evidencia que la planificación local todavía opera de manera fragmentada y que las políticas nacionales no siempre logran permear la gestión territorial de manera integral, generando brechas entre intención normativa y práctica municipal.

Las razones de esta situación son diversas. Por un lado, se evidencia una limitada capacidad institucional en muchos gobiernos autónomos descentralizados (GAD), especialmente en aquellos municipios con menor densidad poblacional y menor capacidad fiscal. La carencia de equipos técnicos especializados, la alta rotación del personal, la falta de acceso a información actualizada y herramientas metodológicas para incorporar los ODS en los planes, han sido factores reiteradamente identificados en la literatura como limitantes críticas para la gestión local (Pérez, 2021; CEPAL, 2023). Estos elementos se reflejan en el bajo porcentaje de GAD que ha recibido asistencia técnica para este propósito: apenas el 48,8 % de los municipios evaluados contaron con apoyo institucional para este fin, según el Examen Nacional Voluntario. Esto indica que la falta de acompañamiento técnico continuo genera desigualdades territoriales en la implementación de la Agenda 2030 y que los municipios con mayor capacidad técnica logran mejores resultados que aquellos con menos recursos.

En este sentido, se constata una brecha importante entre el discurso normativo que promueve la sostenibilidad territorial y la práctica institucional cotidiana. Si bien el marco legal ecuatoriano reconoce la autonomía de los gobiernos locales para planificar su desarrollo, la autonomía efectiva está condicionada por la disponibilidad de recursos, la capacidad técnica y la voluntad política. Como advierte el CEPAL (2018), la descentralización sin fortalecimiento institucional puede derivar en una mayor fragmentación de los esfuerzos de desarrollo y en una profundización de las desigualdades territoriales.

Además, los resultados muestran una tendencia a la especialización temática de los GAD en ciertos ODS. Por ejemplo, 149 municipios están alineados con el ODS 6 (agua potable y saneamiento) y 21 provincias con el ODS 9 (infraestructura resiliente). Si bien esto es un avance relevante en sectores clave para el bienestar, también evidencia una visión parcial de la sostenibilidad. La Agenda 2030 exige una mirada transversal, intersectorial y de largo plazo. Cuando los ODS se abordan de forma aislada o segmentada, se pierde la posibilidad de generar sinergias entre los diferentes ejes del desarrollo, debilitando el impacto de la planificación.

Por otra parte, la participación ciudadana en los procesos de planificación sigue siendo incipiente. Aunque se reportan 10.592 personas capacitadas en temas de participación ciudadana, esto representa solo el 0,06 % de la población nacional, una cifra que pone en evidencia un déficit en la inclusión de la sociedad civil en los procesos de gestión del desarrollo. Como afirman López & Salas (2023), “sin participación activa, los planes de desarrollo corren el riesgo de ser documentos técnicos desvinculados de las necesidades reales de la población” (p.48).

En relación con la calidad de los datos, otro aspecto crítico del estudio es que solo 125 de los 221 municipios fueron evaluados, lo que significa que casi la mitad del país no está representado en el análisis. Esta limitación estadística debilita la capacidad del sistema de planificación nacional para identificar vacíos,

orientar recursos y establecer prioridades. Como advierte la CEPAL (2022), sin datos desagregados, comparables y oportunos, la toma de decisiones se convierte en una práctica intuitiva más que técnica.

En términos de gobernanza, se observa una falta de articulación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno. Si bien existen plataformas de coordinación y mecanismos formales de participación, en la práctica estos espacios no siempre funcionan de forma ágil ni eficiente. Esta situación reduce las posibilidades de construcción de una visión compartida del desarrollo, e impide el aprovechamiento de experiencias exitosas en otros territorios. Según la literatura sobre gobernanza multinivel, tal como lo mencionan Anaya et al, (2022), “la coherencia entre políticas nacionales, provinciales y locales es una condición necesaria para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible” (p.39).

La falta de financiamiento es otra de las barreras estructurales identificadas. Muchos GAD enfrentan restricciones presupuestarias que limitan su acción y reducen sus posibilidades de innovar o implementar proyectos sostenibles. Aunque el COOTAD reconoce la posibilidad de generar ingresos propios, en la práctica la mayoría de municipios depende de las transferencias del gobierno central. Esta dependencia reduce la autonomía efectiva de los gobiernos locales y los vuelve vulnerables a cambios políticos o fiscales a nivel nacional.

Frente a este panorama, el estudio muestra que es posible avanzar hacia una planificación sostenible si se implementan ciertas condiciones habilitantes. Por ejemplo, la creación de un aplicativo nacional para revisar y alinear los PDOT con los ODS representa una herramienta valiosa para mejorar la calidad de la planificación. Asimismo, el fortalecimiento de capacidades institucionales mediante procesos de formación continua y el establecimiento de redes de cooperación entre municipios pueden contribuir a superar los actuales rezagos. No obstante, el éxito de estas herramientas dependerá de la voluntad política, la disponibilidad de recursos y el acompañamiento técnico continuo.

La experiencia de provincias como Manabí o Imbabura muestra que, cuando existen estos factores, es posible alcanzar niveles de alineación superiores al 80 % en las metas ODS, con una alta participación ciudadana y un enfoque integral del desarrollo territorial (Secretaría Nacional de Planificación, 2020).

Comparando los resultados obtenidos con estudios previos en América Latina, se observa que la baja incorporación de los ODS en los planes locales no es un fenómeno exclusivo de Ecuador. Investigaciones en Colombia y Perú muestran que la integración de los ODS en la planificación municipal es generalmente parcial, limitada por recursos financieros, capacidades técnicas y falta de coordinación interinstitucional (Lozano & Hernández, 2025, p.84). Esto evidencia que los desafíos de Ecuador reflejan patrones regionales en la implementación local de la Agenda 2030.

El patrón de especialización temática de los GAD, enfocado en ciertos ODS como agua y saneamiento o infraestructura, coincide con hallazgos de Sisto (2022) quienes identificaron que “los municipios priorizan proyectos de impacto inmediato, dejando de lado objetivos transversales como igualdad de género o sostenibilidad ambiental integral” (p.51). Esta comparación sugiere que la planificación segmentada es una limitación estructural que reduce la efectividad global de los ODS.

La baja participación ciudadana reportada en este estudio también se observa en investigaciones regionales. Ramírez (2025) indica que “en varios países latinoamericanos, la participación efectiva de la ciudadanía en la planificación local rara vez supera el 5 % de la población” (p.21), muy similar al 0,06 % encontrado en Ecuador. Esto permite argumentar que la inclusión social es un desafío estructural y no solo un problema local, enfatizando la necesidad de estrategias sostenibles de participación.

En términos de gobernanza multinivel, los resultados del estudio reflejan lo señalado por González (2025) quien destaca que “la falta de

coordinación efectiva entre niveles de gobierno limita la coherencia de políticas y puede generar fragmentación en la implementación de los ODS” (p.18). Comparar estos hallazgos evidencia que mejorar la articulación intergubernamental es fundamental para alcanzar resultados sostenibles y consistentes en los territorios.

La limitación en la cobertura de datos evaluados (125 de 221 municipios) coincide con los hallazgos de CEPAL (2022) quien advierte que sistemas de información incompletos o desactualizados afectan la planificación basada en evidencia. Esto refuerza que invertir en sistemas de información robustos y desagregados es clave para fortalecer la toma de decisiones y orientar recursos de manera más eficiente. Confiando con experiencias internacionales, como las de algunos municipios en México, se evidencia que la combinación de capacitación técnica, disponibilidad de recursos y herramientas tecnológicas permite un alineamiento superior al 80 % en metas locales de sostenibilidad (Vilchis & Vásquez, 2025, p.83). Esto sugiere que Ecuador podría replicar estos modelos, adaptándolos a su contexto, para mejorar la implementación integral de los ODS.

El bajo nivel de participación ciudadana en Ecuador coincide con patrones reportados en países vecinos, donde la inclusión de la sociedad civil en procesos de desarrollo sigue siendo limitada. Investigaciones en Perú y Chile muestran que la participación activa aumenta la legitimidad y sostenibilidad de los planes locales, y que municipios con mecanismos de consulta efectiva logran resultados más consistentes en términos de desarrollo sostenible (Rojas, 2024, p.31). Por tanto, estos resultados refuerzan la necesidad de diseñar estrategias de participación inclusivas y continuas, que incorporen no solo la capacitación sino también incentivos para la colaboración activa de la población.

Las conclusiones de esta investigación evidencian que la planificación del desarrollo sostenible en Ecuador ha logrado avances normativos e institucionales importantes, pero aún enfrenta barreras significativas para su implementación efectiva. Los hallazgos muestran

que la incorporación de los ODS en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) es parcial, reflejando limitaciones en términos de capacidad técnica, inclusión social, equidad territorial y sostenibilidad financiera. Esto indica que, aunque se han establecido instrumentos de planificación, su aplicación práctica aún requiere fortalecimiento y seguimiento.

Asimismo, la investigación evidencia que la participación ciudadana en los procesos de planificación local sigue siendo mínima, lo que limita la posibilidad de que la sociedad civil influya activamente en la formulación y ejecución de políticas públicas sostenibles. No basta con capacitar a un número reducido de personas; es necesario fomentar mecanismos que permitan la participación informada, vinculante y continua de la ciudadanía para lograr planes de desarrollo más representativos y efectivos.

Otro hallazgo relevante se relaciona con las limitaciones estructurales y financieras de los gobiernos locales. La dependencia de transferencias del gobierno central, la falta de financiamiento propio y la limitada articulación entre niveles de gobierno reducen la autonomía efectiva de los municipios y condicionan la continuidad de los proyectos sostenibles. Esto resalta la necesidad de fortalecer capacidades institucionales, asegurar recursos estables y promover coordinación intergubernamental para mejorar la gestión territorial.

Finalmente, se concluye que avanzar hacia una planificación sostenible requiere no solo cumplir con la normativa vigente, sino generar una cultura de gestión pública transformadora. Esto implica fortalecer la autonomía de los GAD, garantizar financiamiento suficiente, dotarlos de capacidades técnicas permanentes y promover una participación ciudadana activa e informada. Solo mediante la articulación de estos elementos, los gobiernos locales podrán convertirse en protagonistas del desarrollo sostenible en Ecuador y contribuir de manera efectiva a la Agenda 2030, logrando un impacto real en el bienestar de las personas y la sostenibilidad de sus territorios.

Referencias bibliográficas

- Anaya, L., Guerrero, O., Rodríguez, S., Salamanca, M., & Mendoza, M. (2024). Gobernanza multinivel y descentralización en la planificación territorial: Análisis de desarrollo sostenible en García Rovira. *Bitácora Urbano Territorial*, 34(2). <https://www.proquest.com/openview/f4804690d51c4de97522d5635bc5c1fe/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035745>
- Angileli, M., Assumpção, B., Oliveira, T., Álvarez, B., Bardelás, A., Graf, H., & Aviles, U. (2022). Planificación territorial sostenible para la Región Trinacional. *Región Trinacional de Iguazú*, 142. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=mhHjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA142&dq=En+el+caso+de+Am%C3%A9rica+Latina,+muchas+ciudades+tienen+una+doble+carga+en+el+campo+de+la+pobreza+y+la+vulnerabilidad+al+medio+ambiente,+el+apel+del+gobierno+local+en+el+plan+sostenible+es+a%C3%BAn+m%C3%A1s+importante&ots=aZ2QW03thv&sig=Bu252L6Ya8Cd7xzJE3QU8jzVsYZ#v=onepage&q&f=false>
- Aronés, A. (2023). Desarrollo rural en Los Morochucos (Ayacucho, Perú): la voz del conocimiento local en la planificación sostenible del territorio. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2024/hdl_10803_691113/aaac1de1.pdf
- Arredondo, A. (2021). La Agenda 2030 en los gobiernos locales: su contribución a la gobernanza de sostenibilidad global. *Revista legislativa de estudios sociales y de opinión pública*, 14(30), 117-144. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7992836>
- Callejón, M. J. R. (2021). La educación para el desarrollo sostenible como motor de la agenda 2030. El voluntariado como propuesta de actuación. Por un desarrollo sostenible de la Vega de Granada (España), 11. <https://viics.ugr>

- es/sites/vic/viics/public/inline-files/SalvemosLaVega_0.pdf#page=10
- Carrera, M. (2025). Descentralización y desarrollo del capital humano: un estudio del programa de capacitación de la Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo entre los años 2018-2023. [https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/205463/Descentralizaci%
c3%b3n-y-Desarrollo-Monserratt-Michel-Carrera.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/205463/Descentralizaci%c3%b3n-y-Desarrollo-Monserratt-Michel-Carrera.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2020). II Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Perú. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26326VNR_2020_Peru_Report_Spanish.pdf
- CEPAL (2022). *La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades*. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/91c9134d-7551-4419-b602-37842674c0d7/content>
- CEPAL. (2018). *Desarrollo territorial en América Latina y el Caribe: desafíos para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Propuesta de índice anotado*. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ac5b85b2-d077-491b-8ebe-31bebc87ddd2/content>
- CEPAL. (2022). *Visión Colombia 2050*. https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Documento_vision_colombia_2050.pdf
- Cevallos, V., & Zambrano, Y. (2023). Participación ciudadana en la formulación de políticas públicas: Un significado aproximado desde los principios de gobernanza. 593 Digital Publisher CEIT, 8(3), 5-21. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9124368>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Informe de actividades de la Comisión, 2021. file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/S2200632_es-2.pdf
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2021). Revisión Nacional Voluntaria sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/28230Bolivias_VNR_Report.pdf
- Examen Nacional Voluntario Ecuador. (2024). *Informe nacional voluntario de Ecuador sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Secretaría Nacional de Planificación. <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/ExamenNacionalVoluntarioEcuador2024.pdf>
- García, J. (2022). *Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las ciudades españolas: Contribuciones para su evaluación a través de indicadores* (Doctoral dissertation, Industriales). https://oa.upm.es/70175/1/JAVIER_GARCIA_LOPEZ.pdf
- Genta, N., Pérez, R., Williner, A., & Sandoval, C. (2022). Panorama del desarrollo territorial de América Latina y el Caribe 2022. CEPAL. <https://core.ac.uk/reader/541143750>
- Gobierno de la República del Ecuador. (2020). Revisión Nacional Voluntaria sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible – Ecuador 2020 (versión española). Naciones Unidas. Recuperado de https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26393VNR_2020_Ecuador_Spanish.pdf
- Gonzalez, N. (2025). Políticas públicas y planes de desarrollo: claves para una gestión pública efectiva. *Control Visible*, 5(5).
- Gutiérrez, A., Guerra, R., Changuan, O., Guerrero, Z., & Torres, L. (2025). Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la

- Gestión de Proyectos Públicos: Políticas, Alineación Estratégica y Mecanismos de Monitoreo. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 5(2), 85-104. <https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/article/view/1097/1864>
- Hernández, T. (2025). Fortalecimiento institucional y desarrollo local: revisión y perspectivas de las políticas públicas en municipios de quinta y sexta categoría en Colombia. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1-19. <https://epsir.net/index.php/epsir/article/view/1154/748>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2024). Tecnologías de la información y comunicación – TICs. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2024/202407_Tecnologia_de_la_Informacion_y_Comunicacion-TICs.pdf
- López, V., & Salas, C. (2023). La cooperación internacional descentralizada dirigida a proyectos de desarrollo rural y gestionada por las Asociaciones de Desarrollo Integral de las comunidades del futuro de la Tigra y la Fortuna de San Carlos. <https://repositorio.una.ac.cr/server/api/core/bitstreams/b2acea1f-acc9-4bf4-a175-81812d1864d8/content>
- López, A., & Ons, A. (2023). Incentivos a la inversión y transformación productiva sostenible en América Latina. Red Sudamericana de Economía Aplicada. https://www.redsudamericana.org/sites/default/files/talleres/Incentivos%20a%20la%20Inversio%CC%81n%20y%20Transformacio%CC%81n%20Productiva%20Sostenible%20en%20Ame%CC%81rica%20Latina_wp%204%20esp.docx.pdf
- Lozano, M., & Hernández, T. (2025). Evaluación de estrategias para las capacidades institucionales en municipios de 5ª y 6ª categoría en Colombia. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1-16. <https://epsir.net/index.php/epsir/article/view/1597/1414>
- Martínez, H., Guerra, L., Padron, M., & Villalobos, M. (2024). Naturaleza y funciones de la gestión pública: Una mirada a la modernidad del desarrollo social. *Consensus-Santiago*, 8(3), 65-106. <https://pragmatikasolutions.com/consensus/index.php/consensus/article/view/171/186>
- Mattioli, L. (2021). Objetivos del Desarrollo Sostenible en el marco de la escala Local-Barrial. Caso del Barrio “Virgen de Lourdes” en San Juan-Argentina. *Revista Brasileira de Gestão Urbana*, 13, e20190358. <https://www.scielo.br/j/urbe/a/TzpVCfqdZFBChQzYRV7WwVk/?lang=es>
- Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. (2024). Ellas en Datos – noviembre 2024. <https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/11/Ellas-en-Datos-nov2024.pdf>
- Morales, C., Pérez, R., Riffo, L., & Williner, A. (2023). Desarrollo territorial sostenible y nuevas ciudadanías. *Santiago: Publicación de las Naciones Unidas*. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/59e0c82b-1619-493b-b91e-761dd4da6dbc/content>
- Neto, R. (2021). El reto de aplicar la Agenda 2030/ODS ante el déficit de capacidades estatales de los municipios brasileños. *VIII Encontro Brasileiro de Administração Pública, Brasília/DF*. <https://sbap.org.br/ebap/index.php/home/article/view/43/119>
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Pérez, L. (2021). Agenda 2030 en El Salvador, una caracterización sobre las condiciones territoriales de los gobiernos municipales para la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Periodo

- 2015–2019. <https://www.tdx.cat/handle/10803/670755#page=1>
- Pérez, L., & Caballer, A. (2022). Alianzas y asociatividad para el logro de los ODS en El Salvador: una perspectiva desde los gobiernos locales. *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales*, (25), 1-23. <https://revistas.uautonoma.cl/index.php/riem/article/view/1886/1330>
- Pérez, L., & Caballer, A. (2022). Alianzas y asociatividad para el logro de los ODS en El Salvador: una perspectiva desde los gobiernos locales. *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales*, (25), 1-23. <https://revistas.uautonoma.cl/index.php/riem/article/view/1886/1330>
- PNUD. (2023). *Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Gobernabilidad Local Efectiva: Una Estrategia para su Aceleración en América Latina y el Caribe*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-02/es_estrategias_de_localizacion.pdf
- Quecaño, P., & Dominguez, D. (2025). Participación ciudadana para el desarrollo social en la gestión municipal. *Revista InveCom*, 5(2). https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2739-00632025000202025
- Ramírez, C. (2025). Planificación Estratégica Prospectiva y Participación Ciudadana en la Gestión de los Gobiernos Locales. *Latam: revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(2), 26. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10086645>
- Ramos, V. (2022). Gestión en el gobierno local y desarrollo urbano sostenible en el Distrito de Independencia–Lima, 2021. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 3(2), 1039-1052. <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/165/3640>
- Ríos, C., & González, P. (2021). Cambio climático y planificación urbana: Desafíos y oportunidades para la Evaluación Ambiental Estratégica. *Revista de derecho ambiental*, 2(16), 73-107. Ríos, R. C., & González, G. P. (2021). Cambio climático y planificación urbana: Desafíos y oportunidades para la Evaluación Ambiental Estratégica. *Revista de derecho ambiental*, 2(16), 73-107.
- Rojas Montoya, R. J. (2024). Fortalecimiento de la participación ciudadana en proyectos de inversión pública: experiencias latinoamericanas y desafíos para Chile. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/202086/Fortalecimiento-de-la-participacion-ciudadana-en-proyectos-de-inversion-publica-experiencias-latinoamericanas-y-desafios-para-Chile.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Salustio, C. (2023). Gestión ambiental y desarrollo sostenible en los gobiernos locales. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*. <https://dilemascontemporaneoseduccionpolitica yvalores.com/index.php/dilemas/article/view/3537/3489>
- Sánchez, A. (2024). Estrategias de desarrollo local sostenible para el cantón santa rosa: una propuesta aplicable. *Technology Rain Journal*, 3(1). <https://technologyrain.com.ar/index.php/trj/article/view/29/126>
- Santos, D. (2023). LA LOCALIZACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. EL CASO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (MADRID). <https://burjcdigital.urjc.es/server/api/core/bitstreams/767e1f9f-4930-4fe3-b10f-8e2f70462456/content>
- Sarango, P. (2024). Contribuciones de los sistemas de información geográfica (SIG) en la planificación urbana sostenible. *Multidisciplinary Collaborative Journal*, 2(4), 1-15. <https://mcjournal.editorialdoso.com/index.php/home/article/view/1/19>

- Secretaría Nacional de Planificación. (2020). *Informe de evaluación técnica de los PDOT y alineación con los ODS*. Quito, Ecuador. <https://www.odsecuador.ec/wp-content/uploads/2024/08/Informe-Avance-ODS-2021.pdf>
- Sisto, R. (2022). Diseño y aplicación de una metodología de análisis de impacto de las políticas públicas sobre los objetivos de desarrollo sostenible (Doctoral dissertation, Industriales). https://oa.upm.es/70174/1/RAFFAELE_SISTO.pdf
- Torres, H., Peralta, E., Torres, H., & Heredia, D. (2023). Relación entre la gestión pública y el desarrollo sostenible, revisión literaria. *Podium*, (44), 81-102. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S2588-09692023000200081&script=sci_arttext
- Valdiviezo, M., & Martínez, C. (2024). Gobernanza rural y planificación estratégica para el desarrollo sostenible: comunidad indígena San Francisco, Alausí-Ecuador. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 6(3), 55-67. <https://www.editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/1056/1465>
- Vegas, R. (2021). Riesgos globales y capacidades de gobernanza. Claves para la implementación de la Agenda 2030. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (79), 39-76. <https://www.redalyc.org/journal/3575/357570194002/357570194002.pdf>
- Vilchi, I., & Vázquez, A. (2025). La digitalización sistematizada de las instituciones como una herramienta para la transformación sustentable de sus actividades: The systematic digitalization of institutions as a tool for the sustainable transformation of their activities. *Revista De Estudios Interdisciplinarios Del Arte, Diseño Y La Cultura*, (14), 90–109. <https://masam.cuautitlan.unam.mx/seminarioarteydiseño/revista/index.php/reiadc/article/view/349>
- Zelada, B., Cajigas, L., Mendoza, R., Martínez, T., & Vidarte, B. (2025). Desarrollo Sostenible, Proyectos de Inversión Pública y Desarrollo económico”. *Food Policy*, 36(2), 250-258. <https://biblioteca.ciencialatina.org/wp-content/uploads/2025/04/Desarrollo-Sostenible-Proyectos-de-Inversion-Publica-y-Desarrollo-economico.pdf>